

El coronavirus ha puesto en evidencia **muchas cosas que estaban mal en el sistema de relaciones socioeconómicas de este mundo globalizado**, no sólo la deficiente sanidad pública y el deplorable estado de las residencias de mayores. También las carencias e injusticias sociales en el ámbito laboral, en el sistema educativo, en los cuidados a domicilio, en la alimentación, en el suministro de agua y energía, en el transporte, en las telecomunicaciones, en el sistema bancario.

Ahora es el tiempo de **volcar todos nuestros esfuerzos e inteligencia colectiva en presionar a las distintas administraciones públicas** (Gobierno, CCAA y Ayuntamientos) para que la nueva normalidad sea verdaderamente nueva, con **nuevas relaciones socioeconómicas basadas en el respeto a la vida** —y ello entraña el garantizar todos los derechos humanos y de nuestro hogar común la Tierra— **y la justicia social y climática**; un nuevo sistema de relaciones socioeconómicas centrado en el **objetivo común de cubrir las necesidades esenciales de la población**, empezando por la salud y siguiendo por todas las que son imprescindibles para tener salud: los cuidados, la igualdad de derechos para las mujeres, la autosuficiencia agrícola-pesquera-ganadera para garantizar una alimentación sana, el empleo y las condiciones laborales, la educación, la cultura, el agua y el aire limpios, la soberanía energética.

Tenemos mucho trabajo por delante y, en cambio, sólo **dos meses** para exigirlo con propuestas bien definidas al gobierno del Estado y a las fuerzas políticas con representación en el Congreso, pues la **Comisión para la Reconstrucción** ya se ha puesto en marcha y tiene ese plazo de dos meses para debatir y elaborar consensuadamente los dictámenes que luego servirán de pauta de gobierno. Se trata en realidad de un **proceso constituyente** que, de forma extraordinaria impuesta por el coronavirus, **va a definir el marco de relaciones socioeconómicas de los próximos años en nuestro país**. El futuro inmediato y a largo plazo de España dependerá de lo que aquí se decida.

Afortunadamente, desde la eclosión del 15M y las Marchas por la Dignidad hay mucho tejido asociativo en la sociedad civil, y las diversas plataformas ciudadanas y colectivos tienen ya programas de propuestas muy elaborados. Es momento, pues, de reivindicarlas y de **hacerlo con el apoyo de toda la población trabajadora**, presionando desde la calle, desde las ventanas, desde los centros de trabajo.

Hay que alejarse del ruido mediático y metálico y **centrarse en construir la nueva sociedad que queremos, presionando a dirigentes políticos y cargos públicos de los Ayuntamientos, CCAA y Estado** en la dirección que necesitamos y exigimos para asegurarnos una vida digna y con derechos.

- Salgamos a reivindicar **jornadas laborales de 5 horas para repartir el empleo** entre todos —en lugar de las extenuantes jornadas efectivas de 10 horas y con un estrés continuo mientras una cuarta parte de la población no tiene empleo— y que a la vez sirva para **alternar entre hombres y mujeres los cuidados** de menores, mayores y otros dependientes.
- Presionemos para que la **derogación de la reforma laboral de 2012** impuesta por el gobierno del PP sin debate previo ni en el Congreso ni con agentes sociales, sea **íntegra**, porque de ello depende que en lugar de 33 días por año trabajado en los despidos, se cuenten los 45 días que había antes de la reforma y que ahora son cruciales de cara al despido masivo que van a hacer muchas empresas turísticas y de hostelería, según han anunciado estos días sus empresarios para cuando finalicen los ERTE el 30 de junio.

- Exijamos una **sanidad enteramente pública y bien dotada** de personal y medios materiales, **poniendo fin a tantos hospitales y centros de salud concertados**, que siendo de gestión privada (en manos de grandes grupos empresariales y fondos de inversión) se llevan ingentes sumas de dinero público a costa de los recortes en la sanidad pública. Y acompañarla de una **industria farmacéutica pública** que asegure el permanente abastecimiento de medicamentos y material sanitario y el control de precios.

- Exijamos un **sistema de dependencia verdaderamente público** que garantice el cuidado digno de las personas y su atención sanitaria, tanto en residencias como en domicilios, **poniendo fin a tantas residencias concertadas**, que siendo de gestión privada reciben ingentes sumas de dinero público a costa de los recortes en los servicios sociales públicos, incluido el domiciliario, que está totalmente privatizado y en manos de grandes grupos empresariales.

- Reivindiquemos una **educación pública, laica y de calidad**, que fomente la lectura y el pensamiento crítico, accesible a toda la población en todas sus fases, incluidas la infantil y la universitaria, y dotada suficientemente de personal y recursos, **poniendo fin a tantos centros concertados**, que siendo privados se llevan ingentes sumas de dinero público y no cumplen los deberes constitucionales de aconfesionalidad (al adoctrinar en la religión católica) e igualdad (al hacer segregación de sexos o al no admitir a determinados estudiantes por razones de capacidad, raza o extracción social).

- Reivindiquemos unos **servicios sociales públicos bien dotados** que atiendan con respeto y sensibilidad a las mujeres maltratadas, a las personas inmigrantes, a las menores de edad y a las personas sin hogar o simplemente pobres (como vemos a diario en los comedores sociales organizados por colectivos), de manera que no recaiga siempre el peso de esta atención en las asociaciones civiles y ONG, siendo como es una responsabilidad de las administraciones públicas (Ayuntamientos, CCAA y Estado) y exijamos el **cierre inmediato y permanente de los CIE**.

- Exijamos **soberanía alimentaria** garantizando la producción agrícola, pesquera y ganadera suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de la población en España —y no para la exportación sin tener asegurada la autosuficiencia alimentaria— y fomentemos el aumento de pequeños productores locales que cultiven sin agroquímicos y críen animales sanos para **proveernos de alimentos saludables y seguros, en cadenas directas de distribución a la población** para evitar los vergonzosos márgenes de beneficios de los distribuidores y grandes superficies y la imposición de sus alimentos insanos causantes de muchas enfermedades y en su mayor parte superfluos.

- Exijamos recuperar **el agua enteramente pública en todos los municipios del Estado**, así como una gestión participada por la ciudadanía y los trabajadores de dichas empresas públicas, para que el agua sea un bien esencial garantizado para toda la población.

- Exijamos recuperar una **televisión verdaderamente pública**, cogestionada por los propios trabajadores y en cuya programación y contenidos participe la ciudadanía, que asegure la **información veraz** —imprescindible en emergencias sanitarias como la que vivimos, y las que desgraciadamente viviremos en el futuro si seguimos destruyendo el planeta—, el respeto a la inteligencia, el respeto a las mujeres, los valores éticos, la rica multiculturalidad, el fomento de la cultura.

- Reivindiquemos la **nacionalización de bancos que en la práctica ya han sido “nacionalizados”** por todo el dineral que han recibido del Estado en su crisis financiera —como es el caso de Bankia y muchas cajas de ahorros engullidas por los 5 grandes bancos privados—, con el fin de que los préstamos y avales del Estado lleguen de forma efectiva y sin condiciones a la población trabajadora que los necesita.

- Reivindiquemos el restablecimiento de **verdaderas empresas públicas en sectores estratégicos y vitales para la población**, y cuidando siempre el menor impacto en el medio ambiente, como son:

- El **transporte colectivo**: recuperemos los trenes regionales que intercomunicaban pequeñas poblaciones, así como los tranvías en lugar de prolongaciones de metro; ampliemos la frecuencia de metro y autobús y la flota de autobuses eléctricos; prohibamos la circulación de automóviles y motos en el interior de las ciudades; fomentemos el caminar y el uso de bicicletas y patines por vías exclusivas para ello.

- El **suministro de electricidad**: recuperemos la empresa pública que no sólo se encargaba de la red general eléctrica sino también de la producción de electricidad y de su distribución, de manera que terminemos con el oligopolio de 5 grandes compañías que son las que fijan los elevados precios de la luz y el gas; fomentemos la creación y expansión de pequeñas cooperativas de electricidad, como las que ya existen dentro de la economía social (Som energía, La corriente, Ecooo, etc.).

- Las **telecomunicaciones**: recuperemos la empresa pública que garantizaba el suministro de telefonía y que ahora incluye el de internet, de forma que terminemos con el oligopolio de 5 grandes compañías que son las que acuerdan los elevados precios y la mala calidad del servicio; fomentemos la creación y expansión de pequeñas cooperativas de telefonía e internet, como las que van surgiendo dentro de la economía social.

- Reivindiquemos que **en lugar de seguir fomentando el turismo, la construcción y la automoción**, que tanto han perjudicado a nuestra economía por hacerla dependiente del consumo exterior y de una movilidad desmedida y que tanto daño han causado al medio ambiente, por la contaminación del aire y las aguas y por el destroz de ecosistemas naturales, **demos prioridad a las “actividades esenciales”**, no sólo durante la pandemia: a la agricultura, pesca y ganadería, fomentando la producción a pequeña escala y respetuosa con la tierra y los animales; a los cuidados sanitarios y sociales; a la educación en valores éticos y cívicos; a la producción de cultura a pequeña escala; a la limpieza e higienización de las calles y espacios públicos; a la correcta gestión de las basuras y residuos, con especial atención a los de carácter tóxico.

Y como todas las políticas públicas han de ser financiadas con el dinero de todos, acometamos de una vez y con valentía las tareas pendientes:

- Exijamos a todos **los bancos** que fueron rescatados con dinero público tras su crisis financiera, que **devuelvan los 75.000 millones de euros** que ha costado hasta ahora ese rescate bancario a la Hacienda pública.

- Exijamos, no una sino muchas **auditorías de la deuda de las distintas administraciones públicas** (Ayuntamientos, CCAA y Estado) para establecer qué parte es **deuda ilegítima y, por tanto, no pagarla**, ni a los bancos ni a la Unión Europea, de forma que podamos destinar esos millones de euros a todas estas políticas socioeconómicas que defendemos. La propia **Constitución**, a pesar del cambio introducido unilateralmente con el famoso artículo 135 que supedita el gasto público al déficit impuesto por la Unión Europea, permite en su punto 4 superar “Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública [...] en caso de [...] situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados”, tal como advirtió Julio Anguita y el Colectivo Prometeo en su Manifiesto.

- Apoyemos el nuevo **Impuesto a la riqueza** propuesto por Unidas Podemos en la Comisión para la Reconstrucción (y que comparten otras fuerzas de izquierda, como EHBildu, Más País, En Comú Podem), consistente en aplicar un impuesto del 1% a

las grandes fortunas, así como la exigencia de una **auténtica reforma fiscal que redistribuya la riqueza** haciendo recaer mayor fiscalidad de IRPF en las rentas del capital.

- Exijamos una **verdadera persecución de los delitos de corrupción** por parte de la Fiscalía del Estado sin que prescriban los hechos delictivos, con el encarcelamiento tanto de los empresarios corruptores como de los cargos públicos corruptos y la devolución íntegra de lo robado, que se calcula en torno a los 90.000 millones de euros anuales.
- Exijamos un **verdadero control financiero** y una **verdadera inspección fiscal**, dotando de personal y medios al cuerpo de inspectores del Estado y destituyendo a los cargos públicos que frenan e impiden la persecución de delitos fiscales de las grandes fortunas y empresas, de forma que acabemos con el **fraude fiscal**, que supone alrededor de 90.000 millones de euros que no llegan cada año a la Hacienda pública. El Estado puede y debe intervenir para que desaparezcan los **paraísos fiscales** —no hay que irse lejos, los 5 grandes bancos españoles (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia) tienen cuentas opacas que funcionan como paraísos fiscales, ocultando al menos más de 10.000 millones de euros (del total de 90.000 millones colocados en el conjunto de paraísos fiscales para no declararlos en España)— y se impida también la **fuga de capitales**.
- Exijamos un **verdadero control fiscal** que prohíba la **elusión fiscal**, mediante la derogación de las leyes que permiten:
 - Figuras fiscales claramente beneficiosas para las grandes fortunas, bancos y fondos de inversión, como las **Socimi** (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria), que tributan entre el 0% y el 19% por las rentas de alquiler y generan burbujas inmobiliarias a costa de la pérdida del derecho a la vivienda, y las **Sicav** (Sociedades de Inversión de Capital Variable), que sólo tributan al 1% y, por ejemplo, en este mes de abril de fuerte recesión económica por la pandemia han generado una rentabilidad del 11% las que posee el banco Santander.
 - Bonificaciones y exenciones del **Impuesto de Sociedades**, mediante las cuales las grandes empresas pagan en la práctica muchos menos impuestos que cualquier trabajador (en torno al 8 o 9% en lugar del 35% exigido por ley y del 20% de media que pagamos los trabajadores).
 - Bonificaciones y exenciones de impuestos a la **Iglesia católica**, como el IBI, lo que significa que la Iglesia no paga al erario público por ninguno de los centros educativos que regenta, ni por sus residencias de mayores, ni por todas las iglesias y catedrales (de las que obtiene enormes ganancias de capital en sus museos y visitas turísticas), ni por todos los edificios de los que se ha apropiado ilegítimamente gracias a la ley de Aznar que posibilitó las inmatriculaciones.
- Exijamos a la **familia real los mismos deberes y derechos que a cualquier ciudadano**, de forma que paguen los mismos impuestos en consonancia con sus ingresos y empresas, que renuncien a sus privilegios económicos y jurídicos, que devuelvan todo el dinero robado a las arcas públicas en innumerables casos de corrupción desde que se restauró la monarquía y que, mientras dure este régimen heredero del golpe de Estado que acabó con la República, el actual rey ejerza exclusivamente su papel asignado por la Constitución, sin interferir en los asuntos políticos y económicos del país.
- Reivindiquemos una progresiva reducción del **Ejército** y disminución de su papel en el seno de la OTAN y la **inmediata reducción del gasto militar**, de manera que las cuantiosas sumas de dinero público que anualmente invierte el Estado en este sector, y que en gran medida van a parar a grandes empresas privadas de armamento, se destinen a las políticas socioeconómicas que defendemos.

Evidentemente, sabemos que la **élite económica** —los accionistas de las 35 empresas que componen el Ibex— se resiste a perder su poder y que los **partidos políticos** de que se valen (PP, Ciudadanos, Vox, PNV, Navarra Suma, Junts per Cat, Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario) van a obstruir cualquier ley o normativa que recorte sus beneficios económicos y privilegios, como ya estamos viendo con la prometida renta mínima que se paralizó a finales de marzo y nuevamente a mediados de abril o con la derogación “íntegra” de la reforma laboral de 2012 que ha provocado tanto escándalo mediático y artificioso esta semana de mayo. Pero también sabemos que son una auténtica minoría, sólo el 1% de la población, y si nosotros que constituimos la mayoría social estamos unidos en la defensa colectiva de los derechos humanos, somos mucho más poderosos que esa minoría.

No pedimos nada descabellado ni imposible. **Grandes empresas como las energéticas, las químicofarmacéuticas y los grandes bancos están obteniendo beneficios multimillonarios, incluso en este año:** Repsol los cifra en 447 millones de euros, Iberdrola asegura que obtendrá más de 3.400 millones hasta final de año, y los 5 grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia) han obtenido más de 13.500 millones de beneficios. No debemos permitir que las grandes empresas (bancarias, energéticas, químicofarmacéuticas, alimentarias, del textil y la moda) limpien su imagen y su dinero haciendo públicamente donaciones que luego desgravan en la declaración de la renta; debemos exigir que paguen debidamente sus impuestos, que declaren legalmente sus fortunas, que paguen las multas e indemnizaciones por delitos contra el medio ambiente, contra la vida e integridad física de los pueblos indígenas allá donde se instalan estas grandes multinacionales y contra los derechos de sus trabajadores.

Sólo es necesario que **la mayoría de la población manifieste públicamente en la calle** todas estas reivindicaciones **y apoye las propuestas encaminadas en esta dirección** que presenten los partidos políticos en la Comisión para la Reconstrucción que inicia ahora su andadura en el Congreso. También **como consumidores podemos ejercer nuestro poder** seleccionando a qué empresas compramos bienes o pagamos servicios, optando por el pequeño comercio, por la compra directa a pequeños agricultores ecológicos o al menos respetuosos con el medio ambiente, retirando nuestras nóminas o ahorros de esos 5 grandes bancos y abriendo cuentas en cooperativas financieras de la economía social, sustituyendo nuestros contratos de electricidad con las 5 grandes compañías energéticas por otros con las pequeñas cooperativas de la economía social y, sobre todo, **modificando nuestros hábitos de consumo para adecuarlos a una vida más austera y respetuosa con el medio ambiente**, porque ni con energías renovables ni con coches eléctricos ni con agua pública lograremos sanar la grave enfermedad del planeta; es imprescindible que limitemos sustancialmente nuestro consumo, ajustándolo a lo que verdaderamente es necesario, para que todos podamos disfrutar del agua, de alimentos, de la electricidad, de la movilidad, etc. sin destruir la casa de todos: la Tierra.

El coronavirus nos ha brindado la oportunidad de **valorar lo verdaderamente importante en la vida** y el confinamiento nos ha permitido comprobar que muchas cosas que creíamos necesarias son realmente **superfluas y podemos vivir felices sin ellas**. Incorporemos esta valiosa lección a nuestra vida diaria en adelante.

Asumamos la **responsabilidad que tenemos como sociedad civil** de contribuir a crear unas relaciones sociales y económicas más justas y sostenedoras de la vida —la de toda la humanidad y la de nuestro único hogar la Tierra—, y pongámonos a ello; es tarea de todos conseguirlo.